

Ficha técnica: imputaciones sobre narcoterrorismo a personas de América Latina

[English below. Translated with deepL]

La acusación presentada por fiscales de Estados Unidos en 2020 contra Nicolás Maduro lo señala por conspiración para narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. El *indictment* sostiene que, durante años, habría participado en una red que facilitó el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con grupos como las FARC, el ELN y el Cártel de Sinaloa, así como otras organizaciones criminales transnacionales.

Es importante distinguir entre el contenido jurídico de la acusación y el lenguaje político-criminal utilizado por el gobierno estadounidense. La caracterización de Nicolás Maduro como un “cartel kingpin” forma parte de una narrativa política, la cual no se reproduce con el mismo alcance ni en los mismos términos dentro de la acusación presentada en su contra. Si bien el *indictment* sí le atribuye participación en delitos vinculados con narcotráfico, la acusación lo presenta fundamentalmente como un actor estatal presuntamente involucrado en estructuras criminales y redes de corrupción de alto nivel, lo que desde Elementa DDHH lo entendemos a partir de la noción de macrocriminalidad. Esa participación dista mucho de lo que implica ser la cabeza o líder de un cartel. En ese sentido, la categoría de “cartel kingpin” responde más a un lenguaje político-criminal que a un señalamiento formulado en esos términos dentro de la propia acusación.

Desde una lectura situada en México, lo relevante no es sólo el caso en sí, sino la forma en que se construye el llamado “narcoterrorismo”. En el derecho estadounidense no existe un tipo penal denominado “narcoterrorismo”; sin embargo, observamos una configuración jurídica específica, basada en el 21 U.S.C. § 960a, que en la práctica y en la doctrina se conoce como *narco-terrorism*, aunque esa denominación no aparezca expresamente en la ley.

Este precepto construye el delito a partir de dos elementos: por un lado, conductas de narcotráfico, remitiendo a disposiciones como el 21 U.S.C. § 841(a), y, por otro, un elemento subjetivo adicional, consistente en actuar con conocimiento o intención de proporcionar “cualquier cosa de valor pecuniario” a una organización involucrada en terrorismo.¹ En ese sentido, no se sanciona una conducta distinta, sino que el núcleo del delito puede entenderse como una combinación de narcotráfico más la intención o conocimiento de apoyar actividades terroristas.

El término “narcoterrorismo”, por tanto, opera principalmente como una etiqueta doctrinal, política y de litigio, utilizada por el Departamento de Justicia, en los *indictments* y en la narrativa pública, aunque no corresponda a una rúbrica legislativa explícita. Este desfase entre denominación formal y uso práctico no es inusual en el sistema estadounidense, pero en este caso tiene implicaciones particularmente relevantes.

¹ Con base en el *indictment* obtenido a través de Pacer del expediente de Nicolás Maduro.

Esta construcción tiene efectos concretos y preocupantes en América Latina. En primer lugar, habilita una expansión extraterritorial del derecho penal estadounidense, ya que la propia sección 960a contempla una jurisdicción amplia que permite perseguir conductas ocurridas fuera de su territorio, bajo el argumento de que afectan su seguridad nacional. El caso de Maduro se formula explícitamente en estos términos, al referirse a hechos cometidos fuera de la jurisdicción estadounidense pero susceptibles de ser juzgados en tribunales federales.

En segundo lugar, se observa una ampliación del perfil de las personas imputadas. Ya no se trata únicamente de líderes de organizaciones criminales tradicionales, sino también de funcionarios públicos, intermediarios logísticos e incluso actores periféricos dentro de cadenas de suministro. En México, al menos cuatro personas han sido acusadas bajo esta lógica,² pese a que los tipos penales utilizados no existen en el derecho penal mexicano o no se corresponden con las conductas tipificadas a nivel nacional, lo que genera tensiones importantes en materia de extradición, legalidad y debido proceso.³

En tercer lugar, estas imputaciones cumplen una función claramente política. En el caso de Maduro, la acusación opera también como un mecanismo de criminalización de un jefe de Estado adversario mediante categorías de seguridad nacional, más allá de los marcos tradicionales de la criminalidad organizada. Este giro se inscribe en una tendencia más amplia, particularmente visible desde la administración de Donald Trump, de trasladar herramientas del derecho penal antiterrorista al ámbito de las drogas, incluyendo la designación de ciertos grupos criminales como organizaciones terroristas.

Desde una perspectiva de justicia, este fenómeno plantea varias preocupaciones. Por un lado, existe un riesgo de desdibujar el principio de legalidad, en la medida en que los tipos penales se construyen mediante combinaciones flexibles que reducen la previsibilidad de la norma. Por otro, el debido proceso se ve tensionado, ya que las personas acusadas enfrentan cargos que no existen en sus propios sistemas jurídicos y bajo narrativas ampliadas propias del terrorismo. Finalmente, esta equiparación entre drogas y terrorismo contribuye a una militarización discursiva y política, desplazando enfoques centrados en salud pública y derechos humanos.

Más que una categoría jurídica neutral, la etiqueta de "narcoterrorismo" refleja una expansión estratégica del derecho penal estadounidense, que articula la política de drogas con la lógica de la seguridad nacional. Desde México, lo entendemos como un instrumento de poder con implicaciones directas para la soberanía, la cooperación penal, la garantía de derechos en la región y sobre todo, en detrimento a los derechos de las víctimas en Latinoamérica.

² René Arzate García, alias La Rana; Alfonso Arzate García, alias Aquiles; Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo, Pedro Inzunza Coronel. Ver El País, <https://elpais.com/mexico/2026-02-26/estados-unidos-acusa-de-narcoterrorismo-a-alias-la-rana-por-sus-vinculos-con-el-cartel-de-sinaloa-en-baja-california.html>.

³ Ver ElementaDDHH, Extraditar la Verdad, <https://elementaddhh.org/extraditar-la-verdad-mexico-pasos-para-entender-las-logicas-de-la-politica-criminal-en-materia-de-drogas/>

Technical Report: Allegations of Narcoterrorism Against Individuals in Latin America

The accusation presented by U.S. prosecutors in 2020 against Nicolás Maduro charges him with conspiracy for narcoterrorism, cocaine trafficking, and related weapon offenses. The indictment asserts that for years he allegedly participated in a network that facilitated the shipment of large quantities of cocaine to the United States, in coordination with groups such as FARC, ELN, and the Sinaloa Cartel, as well as other transnational criminal organizations.

It is important to distinguish between the legal content of the accusation and the political-criminal language used by the U.S. government. The characterization of Nicolás Maduro as a "cartel kingpin" is part of a political narrative, which is not reproduced with the same scope or in the same terms within the indictment presented against him. While the indictment does attribute participation in drug-related crimes to him, the accusation fundamentally presents him as a state actor allegedly involved in criminal structures and high-level corruption networks, which we at Elementa DDHH understand through the notion of macrocriminality. Such involvement is far removed from what it means to be the head or leader of a cartel. This category corresponds more to a political-criminal language than a characterization actually formulated in those terms within the indictment itself.

From a perspective situated in Mexico, what is relevant is not only the case itself but also how the term "narcoterrorism" is constructed. In U.S. law, there is no specific criminal charge called "narcoterrorism"; however, we see a specific legal configuration based on 21 U.S.C. § 960a, which is practically recognized as narco-terrorism in doctrine, even though that designation does not explicitly appear in the law.⁴

This provision constructs the crime based on two elements: on one hand, narco-trafficking conduct, referring to provisions like 21 U.S.C. § 841(a), and on the other, an additional subjective element, consisting of acting with knowledge or intent to provide "anything of pecuniary value" to an organization involved in terrorism. In this sense, a distinct conduct is not sanctioned; instead, the core of the crime can be understood as a combination of narco-trafficking plus the intent or knowledge of supporting terrorist activities.

Thus, the term "narcoterrorism" operates primarily as a doctrinal, political, and litigation label used by the Department of Justice in indictments and public narratives, even though it does not correspond to an explicit legislative rubric. This disconnect between formal designation and practical application is not unusual in the U.S. system, but in this case, it has particularly relevant implications.

⁴ Based on the indictment obtained through PACER in Nicolás Maduro's case.

This construction has concrete and concerning effects in Latin America. Firstly, it enables an extraterritorial expansion of U.S. criminal law since Section 960a itself contemplates a broad jurisdiction that permits the prosecution of conduct occurring outside its territory, under the argument that it affects national security. The case against Maduro is explicitly formulated in these terms, referring to events committed outside U.S. jurisdiction but subject to prosecution in federal courts.

Secondly, there is an expansion of the profile of the accused. It is no longer just about leaders of traditional criminal organizations but also includes public officials, logistical intermediaries, and even peripheral actors within supply chains. In Mexico, at least four individuals have been charged under this logic,⁵ despite the fact that the criminal charges used do not exist in Mexican criminal law or do not correspond to behaviors defined at the national level, creating significant tensions regarding extradition, legality, and due process.⁶

Thirdly, these allegations serve a clearly political purpose. In Maduro's case, the accusation also operates as a mechanism for criminalizing an adversarial head of state through national security categories, beyond the traditional frameworks of organized crime. This shift is part of a broader trend, particularly visible since the administration of Donald Trump, to transfer tools from anti-terrorist criminal law into the realm of drug offenses, including the designation of certain criminal groups as terrorist organizations.

From a justice perspective, this phenomenon raises several concerns. On one hand, there is a risk of blurring the principle of legality, as criminal charges are constructed through flexible combinations that reduce the predictability of the law. On the other hand, due process is compromised since the accused face charges that do not exist in their own legal systems and under broad narratives typical of terrorism. Finally, this equating of drugs with terrorism contributes to a discursive and political militarization, displacing approaches focused on public health and human rights.

More than a neutral legal category, the label "narcoterrorism" reflects a strategic expansion of U.S. criminal law that articulates drug policy with national security logic. From Mexico, we understand it as an instrument of power with direct implications for sovereignty, criminal cooperation, the guarantee of rights in the region, and, above all, detrimental effects on the rights of victims in Latin America.

⁵ René Arzate García, alias La Rana; Alfonso Arzate García, alias Aquiles; Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo, Pedro Inzunza Coronel. Ver El País, <https://elpais.com/mexico/2026-02-26/estados-unidos-acusa-de-narcoterrorismo-a-alias-la-rana-por-sus-vinculos-con-el-cartel-de-sinaloa-en-baja-california.html>.

⁶ Ver ElementaDDHH, EXTRADITING THE TRUTH - MEXICO: Steps to understanding the logic of US criminal drug policy, <https://elementaddhh.org/extraditing-the-truth-mexico/>